

## **C. Respecto de la extinción de la acción penal.**

### **1. Régimen general de la extinción de la acción penal. .**

La institución de la acción penal y de su régimen de extinción, es fundamental en el proceso penal, por cuanto con ello se limita el ámbito de la persecución del delito, lo cual determina seguridad jurídica para los gobernados, de ahí la trascendencia de su regulación. Resaltan dos aspectos, el primero de ellos es la regulación de la caducidad como un mecanismo de extinción del ejercicio de la acción penal, cuando se ha convertido la pretensión de publica a privada, y la víctima no ha presentado en el plazo estipulado la respectiva acusación (artículo 29 inciso final CPP); el otro aspecto es la no inclusión de la reparación integral del daño como mecanismo extintivo de la responsabilidad penal, ésta última figura muy vinculada a los modelos de justicia reformativa, se diferenciaba de otras formas de resarcimiento, por la peculiaridad de que en estos casos se exigía la reparación completa de los perjuicios causados, tanto materiales como morales, es decir era una especie de vuelta al *status quo ante* de tal manera que ante su no previsión expresa, la misma puede funcionar como una de las variantes de los sistemas de composición penal, sea la conciliación o la mediación.

### **2. La Prescripción.**

La institución de la prescripción es clave dentro del sistema del derecho continental, en el cual se sitúa la legislación salvadoreña, tras la prescripción, se encuentra el derecho fundamental de los justiciables a la seguridad jurídica, por ello, es que los ordenamientos procesales reconocen dentro de sus figuras a la prescripción<sup>1</sup>, y ésta misma en términos generales se ha entendido reconocida también por el debido proceso.

---

<sup>1</sup> Por ejemplo la Sala Constitucional de Costa Rica en el Voto 856-2001 del treinta y uno de enero de dos mil uno expresó: “ha señalado en múltiples oportunidades que la prescripción de la acción penal constituye una sanción procesal ante la inercia de la administración de justicia cuyo objetivo inmediato es garantizar la seguridad jurídica tanto de los sujetos involucrados en la causa como de la colectividad en general. Así

Es por ello que en materia de prescripción se requiere de un sistema integral de prescripción el cual regule aquellos supuestos que tienen aplicación antes de que se haya iniciado la persecución penal, como aquellos en los cuales la misma ya se haya ejercido mediante el requerimiento fiscal. Lo anterior es fundamental para que el instituto de la prescripción penal pueda funcionar adecuadamente, por que de lo contrario se materializan disfunciones interpretativas que afectan en mayor medida la solución de los casos penales.

Por ello es importante la restauración del régimen anterior en materia de prescripción, con lo cual se vuelve a reconocer el régimen de prescripción de la acción penal y la prescripción durante el procedimiento. La formula utilizada para la primera figura es la antigua en la cual estaba redactada de manera muy simple y compresiva, el régimen de la prescripción, cuando no se había iniciado la persecución penal, para ello se indicaba "Si no se ha iniciado la persecución penal, la acción penal prescribirá"(formula del Código Penal de 1974).

En cuanto a los plazos en los cuales se computará la prescripción, el código siguiendo la línea de las nuevas legislaciones, introdujo una modalidad de plazos, señalando el máximo de la pena para aquellos delitos sujetos a penas privativas de libertad, indicando al final que en todo caso, el plazo no podría exceder de quince años, ni ser menor, de tres. Con lo cual se tenía un sistema tripartito de plazos, el de la pena del tipo penal, limitado por dos períodos, uno que no podía ser mayor de quince años, y otro que no podría ser inferior a tres. Los límites se han incrementado debido a una opción de política penal de reconocer un mayor tiempo para que la prescripción penal pueda operar en su sentido extintivo de la acción penal.

---

mismo ha afirmado categóricamente que la determinación de los plazos de prescripción constituye un problema de política criminal, por lo que corresponde al legislador su definición y determinación".

### **3. La prescripción antes del ejercicio de la persecución penal. Forma de cómputo. La regla de la mayoría de la edad de la víctima.**

El denominado cómputo de la prescripción es fundamental en materia de prescripción, para determinar el mismo se recurre a la terminología propiamente de la dogmática penal, el artículo en mención, no ha sido reformado, el texto del artículo es el mismo que se adoptó en su momento, por el artículo 126 del Código Penal, de 1974.

Se ha adoptado una modalidad diferenciadora del ilícito, respecto de las formas de concreción del computo, con lo cual cuando se ha querido abarcar a las dos formas de configuración de aquél se la ha denominado hecho punible, de tal manera que la referencia a delito o a falta, es en su sentido más estricto y no atiende a un criterio material del mismo. Así quedan regulados en el artículo 33 CPP los supuestos para los delitos consumados, los tentados, los continuados, los de carácter permanente y los oficiales.

Se ha introducido una nueva figura que incide en el cómputo de la prescripción, y es la extensión del plazo por un año, en el caso que el período que ha de computarse conforme a las reglas tradicionales enumeradas en los cinco supuestos vence antes que la víctima del delito alcance la mayoría de edad. La forma de conteo, sigue estando fincada en la materialización del resultado, de tal manera que se iniciara cuando el delito se consume, cuando se realice el último acto de ejecución si fuere una tentativa etcétera, y a ese periodo ordinario, únicamente si venciera antes de que la víctima alcance la mayoría de edad, podría prorrogarse por un año más.

### **4. La prescripción durante el procedimiento. Finalidad hermenéutica. Modelo de plazo de remisión.**

Como lo expresamos una correcta técnica en el manejo de la prescripción, aconseja, que se pueda tener un sistema diferenciado y uniforme, en el sentido que se distinga de la prescripción que rige cuando no se ha iniciado el proceso penal, de aquella prescripción que se tiene en cuenta, cuando el proceso ya ha iniciado.

Lo anterior por que las causas de interrupción y de suspensión que se maneja en la doctrina, y en el derecho comparado, están necesariamente vinculadas a los momentos de la prescripción, por ello la no previsión de causas que hagan prescribir el procedimiento durante su tramitación en sede jurisdiccional vuelve completamente disfuncional el régimen de prescripción.

Por tal razón el legislante reconociendo esa necesidad por motivos de política penal ha reconocido la necesidad de establecer un tiempo máximo para la prescripción del ejercicio de la acción penal durante el procedimiento judicial, tomando como primer punto de partida la pena en abstracto para el delito que se juzga, de ahí el plazo que se considera es igual a la mitad del máximo, es decir el límite superior de la pena del tipo penal rebajado a la mitad, sin que en ningún caso ese plazo pueda exceder de diez años que sería de suyo el límite máximo, ni podría ser menor de tres años, cuando se tratara de pena privativa de libertad.

**5. La suspensión del cómputo de la prescripción. Nuevas formas. Excepción a la acción privada. El tramite de la extradición activa. La incapacidad sobreviniente de carácter temporal.**

La suspensión del término de la prescripción es una formula necesaria en este instituto, las causales que se manejan son las similares, que se proponen en la doctrina y en las legislaciones comparadas, por lo que es menester que tales formulaciones se mantengan.

Sólo resta señalar que la gran consecuencia de la suspensión del término de la prescripción, es que mientras se mantenga la situación que ha generado la suspensión el plazo de la prescripción no corre, y vuelve a correr sólo cuando desaparece el motivo que suspendía el término de la prescripción; como consecuencia ulterior el período corrido de la prescripción antes, que acaeciera la suspensión es un tiempo que se abona al cómputo total.

Se reconocen como motivos, los llamados obstáculos, y si se trata de motivos legales la prejudicialidad. La ruptura del orden institucional cuando

se trate de delitos relativos al sistema constitucional, la aplicación de los criterios de oportunidad o de la mediación o conciliación cuando todos ellos queden sujetos a plazo, y de igual manera la suspensión condicional del procedimiento.

Modificación importante ha sufrido la cuestión de la incapacidad sobreviniente, por cuanto en este caso únicamente se admite la suspensión del término de la prescripción cuando la misma es diagnosticada de carácter temporal, si es permanente la afectación psíquica del encartado, entonces no se aplica la suspensión de la prescripción y el trámite que ha de seguirse es el dispuesto en el artículo 85 inciso final del CPP.

Es conveniente indicar que la rebeldía del imputado ha sido reacondicionada y deja de ser una causal de suspensión, que por tal motivo sería indefinida hasta que el imputado compareciera al proceso, para ser tratada como motivo de interrupción.

## **5. La interrupción de la prescripción. Causas. La novedad del plazo de la interrupción. Forma de cómputo para el inicio del nuevo plazo.**

La interrupción del término de la prescripción significa esencialmente que el plazo que había corrido de la prescripción se pierde, volviéndose a contar de nuevo el mismo, cuando ha concurrido el motivo previsto en la ley, se aplica este mecanismo para eventos que suceden en el proceso, sólo que de manera sumamente extraordinaria, por la consecuencia de que cuando se interrumpe la prescripción el plazo cuenta de nuevo de manera integra.

Los motivos de interrupción de la prescripción son dos la rebeldía del encausado y el dictado de la sentencia aún no firme. Ambos solo tienen efectos durante la prescripción del procedimiento, de tal manera que el plazo previsto para que prescriba el hecho durante la fase del procedimiento queda interrumpido si el imputado se sitúa en una situación de rebeldía o si se dicta sentencia definitiva y ésta es recurrida. Para el caso de la rebeldía del imputado se estableció un sistema diferente de conteo de plazos a efectos de

que la interrupción no fuese considerada indeterminada. Así el período primero es el de tres años tiempo máximo en el cual puede durar la interrupción, finalizado el mismo, se comienza a computar el término general de la prescripción de la acción penal, la cual se aumenta en un tercio. Es decir que a la regla prevista en el artículo 32 CPP deberá aumentarse un tercio del límite que resulte.

**Fuente académica: Libro "Reflexiones sobre el Nuevo Proceso Penal". Sánchez Escobar, Carlos Ernesto y otros. 1ra. Edición. CNJ/ECJ.2009.**